

**NOMENCLATURA** : 1. [40]Sentencia  
**JUZGADO** : 26° Juzgado Civil de Santiago  
**CAUSA ROL** : C-12497-2020  
**CARATULADO** : ESCOBAR/FISCO DE CHILE-

**Santiago, dos de Agosto de dos mil veintidós**

**VISTOS:**

Comparece don Felipe Daniel González Berríos, abogado, domiciliado en Estado N° 215, oficina 806, comuna de Santiago, en representación de don **LUIS CESAR FERNÁNDEZ ZÚÑIGA**, pensionado, domiciliado en calle Bulnes N° 312, comuna de Rancagua; de don **PATRICIO LEANDRO TORRES RIVERA**, pensionado, domiciliado en Padre Hugo Ríos N° 132, comuna de Buin; de doña **GLORIA MARÍA PALOMINOS GONZÁLEZ**, pensionada, domiciliada en Padre Hugo Ríos N° 132, comuna de Buin; de don **JOSÉ JAIME FUENTES PÁVEZ**, pensionado, domiciliado en calle Pasaje Phoenix N° 1028, Villa Celeste, comuna de La Florida; de don **OMAR PÉREZ SANTIBÁÑEZ**, pensionado, domiciliado en San Marcos N° 2861, Parque San Francisco, comuna de Puente Alto; y de don **PATRICIO ÁNGEL ESCOBAR SOLORZA**, pensionado, domiciliado en Pasaje Toralillo N° 0926, Villa Comercio II, comuna de La Granja, quien deduce demanda en juicio ordinario de hacienda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, domiciliado en Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Funda su acción en que es un hecho de público conocimiento que el 11 de septiembre de 1973 es derrocado el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossens, tomando el poder un régimen de facto que se extendería por casi 17 años, caracterizado por una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, violencia política, jurídica y social de la que fueron víctimas cientos de miles de personas. Esta época de dictaduras militares en Latinoamérica, con razón, ha sido calificada por quién fuera el historiador más renombrado del siglo pasado como *“el período más oscuro de su historia del siglo XX, la era de las dictaduras militares, el terrorismo de Estado y la tortura”*.

A pretexto de una situación de guerra interna, se produjeron graves violaciones a los derechos más fundamentales de la persona humana, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales vigentes, la Constitución y las leyes. Una vez consumado el alzamiento contra el orden constitucional, los oficiales sediciosos, al margen de todo derecho, justicia o razón, implementaron un plan de violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos.

Dicha política de represión, de tipo genocida, tenía por objetivo preciso el exterminar a grupos nacionales segregados políticamente, cuya identidad se funda en sus aspiraciones y creencias políticas. Desde las más altas esferas de poder, utilizando



medios, recursos e infraestructura estatal, implementando políticas de Estado, los cuerpos de seguridad un actuar desarrollaron un actuar que sólo puede ser calificado de ilícito, asesinando, secuestrando personas, haciéndolas desaparecer, y aplicando tormentos.

Los hechos consignados en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech I) evidencian la implementación de esta política por parte del Estado de Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990 en todo el país. La sistemática violación de los derechos fundamentales de las personas por la dictadura militar ha quedado grabada en la conciencia de quienes han sido víctimas.

A partir del 11 de septiembre un sinnúmero de personas, simpatizantes, partidarios o militantes de los partidos políticos Comunista, Socialista o Mapu, personas que participaban del proceso de la reforma agraria, dirigentes sindicales, trabajadores, campesinos, pobladores, estudiantes u otros, fueron detenidos, imputándoseles en algunos casos, hechos tales como ser organizadores de ficticios planes asaltar cuarteles militares, pertenecer a grupos paramilitares, raptos de hijos de militares, organización, realización y participación en reuniones clandestinas, acopio de armas, intentos de apoderarse de los servicios públicos básicos, de las comunicaciones, del puerto, por la fuerza de las armas o en otros, sin prueba alguna con excepción de su simpatía, cercanía, pertenencia, tener relaciones de amistad o parentesco con quién tuviera alguna relación con algún partido político de izquierda. Esta práctica de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos fundamentales incluía, entre otras conductas criminales: (a) detenciones ilegales y secuestro; (b) la tortura como práctica generalizada; (c) violaciones y diversos maltratos sexuales; (d) desaparición forzada de prisioneros; (e) ejecuciones de opositores; (f) asesinatos con fines de intimidación pública; (g) actos de terrorismo de Estado contra opositores en el extranjero<sup>5</sup>; (h) trabajos forzados y otros tratos crueles a prisioneros; (i) detenciones masivas y represión indiscriminada de personas; (j) uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes civiles, entre otros.

Respecto a los antecedentes de hecho específicos de cada uno de los demandantes, señala los relató en primera persona de los acontecimientos de los que fueron víctimas y que motivan la presente demanda:

LUIS CESAR FERNÁNDEZ ZÚÑIGA: *“En esos años era comerciante y dirigente político del MAPU. Me tomaron detenido la primera vez en el año 1974, cuando me allanaron la casa y estuve detenido en el Cuartel de Investigaciones ubicado en Rancagua. Fui relegado a Chaitén ya que me acusaron de extremista, pero no me fui porque varias personas me ayudaron con gestiones. Siempre me hicieron allanamientos en el negocio, me acusaban de delitos tributarios. Esa vez estuve aproximadamente cinco días detenido, donde me golpearon e interrogaron. Nos sacaban de la celda en la madrugada, uno por uno.*

*La segunda detención ocurrió en 1984, cuando se estaban sucediendo las protestas más grandes. Nuevamente me allanaron la casa y el negocio, de esos allanamientos que dejaban la escoba, sacando a mis hijos de la casa en la madrugada (a esa altura tenía tres hijos), operativos en los que participaba carabineros y la CNI. En esa*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXECXXQSEBR

*oportunidad estuve detenido cinco días, quedando detenido en el cuartel de investigaciones.*

*Pasado ese tiempo, me liberaron e inmediatamente volví a ser detenido en la calle, pues se suben a mi vehículo cuando estaba llegando a mi negocio, y me llevan a investigaciones nuevamente siendo trasladado a Santiago, al Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna. Ahí recuerdo que estuve dos días, sufriendo interrogatorios de madrugada, golpes, me acusaban de ser el responsable de unas intervenciones de la radio Rebelión en la televisión, en Rancagua. Llegó un policía de Rancagua que dijo que me llevaría al norte, nos subimos a un bus y me llevó a La Serena, me dejaron detenido, específicamente un día viernes. Me encerraron en un calabozo en la cárcel de La Serena, la cual recién se abrió el día lunes, estando aislado todo el fin de semana sin comer.*

*Luego, me llevaron a Alto del Carmen en donde me dejaron con carabineros. Ahí me dijeron que tenía que ir a firmar tres veces al día, que podía moverme solamente por el pueblo. Pedí ayuda en la iglesia a don Gerardo Papen (padre norteamericano de la orden Santa Cruz), manteniéndome tres meses en ese pueblo. Esto me impactó mucho en el ámbito familiar, pues mis tres hijos quedaron muy marcados con los reiterados allanamientos, especialmente por la gran violencia que usaban los agentes, nos sacaban de la cama y de la casa de madrugada.*

*También me vi enormemente afectado para brindar el sustento económico a mi familia, perdíamos día a día clientela, por los mismos allanamientos y múltiples detenciones la gente se asustaba. Los allanamientos eran con mucho escándalo con un gran despliegue, entonces me dejaban con una imagen de terrorista y eso no me permitía hacer una vida normal, por estas razones la detención y la tortura me afectaron mucho psicológicamente porque en simples palabras no podía hacer mi vida tranquila, durante años estuve en un constante ir y venir de detenciones, interrogatorios, era realmente agotador y me dejó marcado de manera negativa en lo emocional y mi autoestima. Finalmente fui reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura del año 2005. Mi registro como víctima es el N° 8403.”*

*PATRICIO LEANDRO TORRES RIVERA: “Me tomaron detenido a los 19 años, cuando ya estaba terminando la escuela, me tomaron detenido en enero de 1988, me llevaron a un Cuartel de Investigaciones en la comuna de El Tabo. Me tomaron porque yo andaba con una piocha del Frente Patriótico, me golpearon, me dijeron que quedaba detenido y que pasaba a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago. Después me trasladaron al cuartel de Barrancas ubicado en San Antonio, estando a cargo funcionarios de investigaciones hasta que llegaron funcionarios de civil, a quienes me entregaron. Ahí, me colgaron con cadenas de las manos, quedando con profundas marcas en las muñecas. Me pegaron con un palo en la boca quebrándome los dientes, para luego ser vendado y llevado al segundo piso. En esa habitación me aplicaron la corriente. Al acostarme en una cama de huincha sabía que se venía ahí, era la aplicación de corriente. Me empezaron a preguntar por qué estaba encargado por la Segunda Fiscalía Militar. Estas preguntas se*



debían a que tenía compañeros que habían caído presos en La Bandera y me decían que ellos me habían delatado de participar en las brigadas Rodriguistas. Me mojaron con una manguera y me lanzaron a un calabozo todo empapado. Al otro día me fueron a entregar a Gendarmería de Barrancas, quienes no me quisieron recibir, a consecuencia de estar todo herido y ensangrentado. Entonces me devolvieron y me dijeron que me cambiara de ropa para que me aceptaran, no me quise cambiar y me volvieron a golpear, debiendo al final cambiarme obligado. Así, me dejaron a cargo de Gendarmería y me pasaron al patio de los presos comunes en la cárcel de Barrancas de San Antonio. Quedé expuesto y los presos también me soltaron. En ese lugar me ayudaron abogados de la Vicaría, porque mis familiares me estaban buscando. Pudieron llevarme ropa y pude hacer valer la categoría de preso político gracias a la ayuda de ellos. El 1 de febrero de 1988 me trasladan a la Cárcel Pública de Santiago, pasando la primera noche en la Penitenciaría, incomunicado en una celda de aislamiento que la llamaban “el metro”. Al otro día me pasaron a la Segunda Fiscalía Militar y el juez me dijo que figuraba en una causa y que quedaba preso. Por eso, quedé detenido hasta noviembre de 1989, supuestamente salí en libertad por el indulto presidencial. Me dieron la libertad y me fui inmediatamente a la comisión nacional de derechos humanos. En la calle, tuve que buscar protección porque varias veces me fueron a buscar civiles a mi casa. El daño causado ha sido inmenso. Por cualquier cosa me pongo llorar, me acuerdo y me da pena, me afecta hasta la actualidad. Perdí mis piezas dentales y sufro de dolores a las muñecas al hacer fuerzas pequeñas. Las lesiones psicológicas están tan latentes, que, al momento de recordar las terribles situaciones vividas, volví a llorar todos los días, pues me implica revivir la tortura y humillaciones. Finalmente fui reconocida por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas”, en el anexo elaborado por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, del año 2011. Mi registro como víctima es el N° 8782”

GLORIA MARÍA PALOMINOS GONZÁLEZ: “El 11 de septiembre de 1973, yo estaba embarazada y trabajaba en una empresa de cecinas ubicadas en la comuna de San Miguel, me tomaron detenida desde mi lugar de trabajo, era obrera, tenía 18 años y 8 meses de embarazo. Me llevaron a la Fuerza Aérea de San Bernardo, junto a otros trabajadores detenidos. En total éramos unos 60 detenidos.

Los funcionarios de la fuerza aérea nos hicieron tirarnos al suelo con las manos en la cabeza, nos amenazaron y luego nos subieron a camiones militares de la misma institución. También iba en calidad de detenido mi esposo, José Francisco Cisterna Valenzuela, (fallecido), él también era obrero. Permanecí detenida un día completo, seguramente fui liberada por mi evidente embarazo, pero mi esposo quedó detenido durante una semana. Durante el tiempo que estuve ahí me tenían vendada al igual que el resto de las personas, me sometieron a simulacros de fusilamiento e interrogatorios, preguntando por armas, militancia política, instando a delatar a otras personas que tuvieron ideas políticas de izquierda, que diéramos direcciones, que donde se juntaban.



*Durante la semana que él quedó detenido fue una incertidumbre muy grande, no sabía nada de él, además me habían separado de él y estaba vendada. Estuve con síntomas de pérdida y tuve que hacer reposo por el estrés que me causaron, esto me causó un impacto psicológico muy fuerte, imagino que porque estaba embarazada, lógicamente el terror de poder perder mi bebé fue infernal, también tuve que soportar el miedo de la detención de mi pareja. Finalmente fui reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la "Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas", en el anexo elaborado por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política, del año 2010. Mi registro como víctima es el N° 6481."*

*JOSÉ JAIME FUENTES PÁVEZ: "El día 12 de septiembre de 1973 a eso de las 7:30 am, me tomaron detenido en la empresa manufacturas Sumar, ubicada en Carlos Valdovinos 200, comuna de San Joaquín, yo era mecánico textil y nos tomaron detenido junto a muchos trabajadores más, yo calculo unos 60 trabajadores. Eran militares del ejército en camiones, nos hicieron tirarnos en el suelo, con los brazos extendidos, boca abajo, caminaban por arriba de nosotros preguntando por armas, luego nos subieron a los camiones arrodillados con las manos en la cabeza y nos trasladaron al Regimiento Buin ubicado en Recoleta, ahí estuvimos un día y una noche, nos dejaron en las pesebreras donde estaban los animales. Después nos trasladaron al Estadio Chile, ahí estuvimos dos días y dos noches, ahí presenciamos que mataron personas, nosotros presenciábamos ese tipo de cosas, ya sea escuchándolo o cuando era evidente que habían detenidos que los apartaban y no se sabía más de su paradero. Después en buses nos trasladaron al Estadio Nacional, permaneciendo ahí hasta el 12 de octubre de 1973, ahí nos ubicaron en el camarín Tres, ahí nos sometieron a simulacros de fusilamiento y los interrogatorios individuales eran en el velódromo, con malos tratos y amenazas de muerte, apuntándonos en la sien. Es decir, permanecí detenido un mes en total. Todo esto me causó daño psicológico, problemas para dormir, inestabilidad emocional, perdí mi trabajo y no pude volver a tener la estabilidad laboral y mental con que contaba antes de la detención y tortura. Finalmente fui reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura del año 2005. Mi registro como víctima es el N° 9014."*

*OMAR PÉREZ SANTIBÁÑEZ: "Me tomaron detenido el día 29 de octubre de 1973, estaba en mi casa ubicada en Conchalí, calle G, población Arquitecto Oerens, solamente me llevaron a mí, hicieron una redada pasando por otras casas, a mí me detuvieron porque recién me habían escogido como dirigente del Servicio de Salud, del área Norte, Hospital Base San José, ya que trabajaba como chofer de ambulancia. Me subieron a un vehículo investigaciones y me llevaron al Cuartel de Investigaciones ubicada en calle General Mackenna, ahí me golpearon con culatazos mientras bajaba las escaleras, con las manos en la nuca, caí por las escaleras hacia abajo. Me dejaron en un espacio subterráneo donde había otros detenidos, conocido como la Patilla, ese día eran*



unos treinta detenidos, ahí estuve más o menos siete días, tenían el baño adentro del subterráneo, era un hoyo en el piso, era un lugar totalmente insalubre.

Me sacaron tres veces de este subterráneo a interrogatorios, golpeándome y me preguntaban por el traslado de medicamentos que realizaba al consultorio de Renca y por antecedentes de los Médicos a cargo de los procedimientos. Había perdida de medicamentos y me culpaban a mí. Me tenían con la vista vendada y las manos amarradas detrás de la espalda. Después me trasladaron al Estadio Nacional, ahí permanecí un mes detenido aproximadamente. Primero estaban a cargo los Carabineros y después los funcionarios de la aviación. Después me trasladaron al Estadio Chile. Ahí estuve dos meses y medio aproximadamente, no recuerdo tiempos exactos. Posteriormente me mandaron detenido a la Penitenciaría de Santiago, ahí estuve un par de meses, en total sé que estuve 9 meses detenido si sumo el plazo de cada detención. Cuando fui liberado nunca más me dejaron volver a trabajar, me quedaron debiendo tres meses de sueldo y no me pagaron mis ocho años de servicio. A esa fecha tenía cinco hijos pequeños y me quedé sin ninguna manera de mantenerlos. Mientras estaba detenido, recién a los cinco meses pude saber de ellos porque la Cruz Roja Internacional hizo una visita a la Penitenciaría y ellos me ayudaron con el contacto a mi familia. En la penitenciaría me hicieron firmar una renuncia voluntaria al trabajo, con una metralleta en la cabeza y dos carabineros al lado mío, yo quería leer que estaba firmando y no me dejaron, después supe que era mi renuncia voluntaria sin derecho a indemnización. En cuanto al daño, la detención y tortura me causaron un daño en mi relación con mi familia, el abandono a mis hijos y mi pareja durante todos los meses que estuve detenido, ellos quedaron en la miseria, mi mujer estaba de allegada en la casa de sus padres para poder alimentarse y ellos tampoco estaban en buena situación. Además, al ser liberado estaba sin trabajo, andaba con miedo, no quería salir a la calle, perdí todos mis años de servicios, tuve que trabajar en construcción, en trabajos esporádicos. Salí de la cárcel sin confianza, sin seguridad en mí mismo y pensando que podías volver a tomarme detenido. Finalmente fui reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura del año 2005. Mi registro como víctima es el N° 18868.”

PATRICIO ÁNGEL ESCOBAR SOLORZA: “Tenía 14 años de edad cuando me tomaron detenido, esto ocurrió a las 5 de la tarde del 11 septiembre de 1973, yo vivía cerca de Lo Valledor, cerca del Grupo 10 de la FACH, venía caminando con un amigo, SERGIO QUIRILAO, cuando apareció un camión de militares y nos subieron al vehículo y nos llevaron detenidos a la 21 Comisaría de José María Caro, que actualmente corresponde a la comuna de Pedro Aguirre Cerca. Ahí estuvimos casi un día, completo, luego nos trasladaron al Cuartel del Regimiento Tacna ubicado Santiago centro, calle Tupper, ahí estuvimos un par de horas y luego sigue el traslado hasta el Estadio Chile, permaneciendo cinco días aproximadamente. Desde ahí nos trasladan al Estadio Nacional, donde calculo que estuve detenido unos 20 días. Mi familia me buscó durante días y nos negaban, no les daban ninguna información. Nuestra detención duró hasta que



*un coronel que estaba haciendo una inspección de los detenidos, se dio cuenta que era menor de edad, llamó a un subalterno y pidió explicaciones de por qué nosotros, siendo menores de edad, no podíamos estar ahí, nos ficharon, nos sacaron foto y luego nos dieron la libertad. En total estuve detenido aproximadamente 21 días detenido. La tortura fue psicológica, maltrato en los trayectos, en el Estadio Chile pasaban balas, realizaban fusilamientos, nosotros los escuchábamos, era una forma de amedrentarnos. Lo que más me ha causado daño fue el maltrato psicológico, es que yo era estudiante en un colegio nocturno llamado AN 110 Liceo Nocturno José María Caro, entonces era muy inmaduro, no tenía las herramientas para soportar tanto miedo. Mis padres también sufrieron mucho todos esos días tratando de dar con nuestro paradero, hasta el día de la libertad. Finalmente fui reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas”, en el anexo elaborado por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política, del año 2010. Mi registro como víctima es el N° 2773.”*

Señala que los autores de dichos hechos son agentes del Estado, que formaban parte del Ejército de Chile, Carabineros de Chile y Policías de Investigaciones, que organizados, desarrollaron una política criminal al amparo de un régimen político dictatorial, cuyo origen ilegítimo se produce en el contexto de un golpe de estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973, todos los agentes que participaban de las sesiones de tortura tenían la calidad de funcionarios públicos o agentes del Estado en cuanto eran miembros de las Fuerzas Armadas. En virtud de esta condición cabe responsabilidad civil al Estado de Chile. Existe responsabilidad extracontractual que tiene origen en un hecho ilícito, a raíz del cual se ha originado un daño, existiendo relación de causalidad entre la acción del funcionario público y el daño producido. La acción civil tiene su origen en un delito de lesa humanidad y por eso tiene un carácter humanitario.

La Ley de Bases Generales de la Administración señala que el Estado será responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado.

En cuanto al derecho, indica que los hechos descritos en la demanda, configuran graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, entre otros de tortura y persecución. En tal caso, se han vulnerado todos aquellos instrumentos de carácter internacional que consagren el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente, los arts. 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los arts. 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios de Núremberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la



Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y las normas de ius cogens relativas a crímenes internacionales.

Así como también se han vulnerado normas internas como lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, 4 y 38 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, citando doctrina al efecto, y principios como la coherencia, finalista, reparación integral e imprescriptibilidad de dichos delitos.

En la conclusión, previas citas legales y demás normas pertinentes, solicita tener por interpuesta demanda en juicio de hacienda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, acogerla a tramitación y, en definitiva, sea condenado a pagar a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de \$150.000.000.- para cada uno de los demandantes, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos, con costas.

Con fecha 28 de septiembre de 2020, se verificó la notificación de la demanda.

Con fecha 16 de octubre de 2020, el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, contestó la demanda, solicitando su rechazo, fundado en primer lugar, en que la indemnización sería improcedente, dado que el demandante ya fue indemnizado, pues la Comisión Verdad y Reconciliación, también llamada Comisión Rettig, propuso una serie de propuestas de reparación, las que fueron recogidas por la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas, estableciendo los siguientes mecanismos: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas. Asimismo y por la ley ya referida, tiene derecho a gratuidad en las prestaciones médicas, entre otros; citando jurisprudencia de las Excma. Corte Suprema que avalaría ello como monto suficiente de indemnización, ya que los mecanismos de reparación buscan compensar los daños a fin de no volver a solicitar indemnización de perjuicios, razón por la que opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el actor.

En subsidio, opuso la excepción de prescripción extintiva, dado que la detención ilegal, apremios y tortura que sufrieron, ocurrieron entre los años 1973 y 1974, 1984 y 1988 y en las fechas que señalan, a la fecha de notificación de la demanda, hecho ocurrido el 28 de septiembre de 2020 -considerando suspendido el plazo de prescripción durante el período de la dictadura militar-, la acción se encontraría prescrita, ya que ha transcurrido en exceso el plazo de 4 años, según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, opone similar excepción alegando lo establecido en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, ya que ha transcurrido en exceso el plazo de 5 años. Añade, que no existiendo norma expresa, corresponde aplicar el derecho común, siendo prescriptible la acción para perseguir la responsabilidad civil, debiendo establecerse





expresamente su imprescriptibilidad, como excepción, lo que no estaría ni siquiera dispuesto en los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile.

En subsidio de las excepciones opuestas, afirma que el monto pretendido es excesivo, atendido que el daño moral no se puede cuantificar; y en subsidio de todo ello, al conceder la indemnización se debe considerar lo ya pagado.

Afirma que es improcedente el pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes deberían contabilizarse desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, y que mientras no exista tal fallo, no hay mora, por tanto, los intereses, también son improcedentes.

Concluye, pidiendo el rechazo de la demanda, con costas.

Con fecha 24 de octubre de 2020, se evacuó la réplica.

Con fecha 6 de noviembre de 2020, se evacuó la dúplica.

Con fecha 18 de noviembre de 2020, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 4 de julio de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Don Felipe Daniel González Berríos en representación de don Luis Cesar Fernández Zúñiga, de don Patricio Leandro Torres Rivera, de doña Gloria María Palominos González, de don José Jaime Fuentes Pávez, de don Omar Pérez Santibáñez y de don Patricio Ángel Escobar Solorza, dedujo demanda en juicio de hacienda de indemnización de perjuicios, en contra del Fisco de Chile, y sobre la base de los fundamentos expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, solicitando sea condenado a pagar la suma \$150.000.000.- para cada uno de los demandantes, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos, con costas.

**SEGUNDO:** Que la demandada contestó solicitando el rechazo de la demanda, con costas y oponiendo las excepciones de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el actor y de prescripción de la acción.

#### **I. Algunas consideraciones preliminares.**

**TERCERO:** Que en materia de orden público internacional y según se desprende de lo dispuesto en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se entiende por **norma de ius cogens** “*norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internación de Estados en su conjunto que no admite acuerdo en contrario (...)*”.

Sobre el particular Regina Díaz Tolosa en su obra “Derecho internacional humanitario y el Derecho penal internacional Especial referencia a su aplicación en Chile” expresa: “*El ius cogens es fuente material del derecho internacional público, fundada en la necesidad de protección de los más esenciales bienes jurídicos de la humanidad, aquellos que permiten que la misma permanezca y no se extinga, a saber: la dignidad humana y la seguridad y paz internacionales*”. Y agrega: “*(...) El ius cogens desplaza en su aplicación a otras normas -internacionales o nacionales- que sean contrarias o anulen*



*sus propósitos en razón de su materia (...) Se incorpora el ius cogens de manera automática a los derechos internos, pues el fundamento tras este tipo de normas coincide con los que cada Estado “civilizado” considera esenciales (...)” Finalmente indica: “La jurisprudencia internacional ha destacado que, tratándose de normas de ius cogens, los Estados se encuentran obligados al margen de todo vínculo convencional, por constituir principios de derecho internacional consuetudinario que no pueden ser transgredidos (...) la codificación de las normas de ius cogens -y ciertamente la de cualquier norma internacional- reporta la ventaja de evitar suspicacias respecto de la existencia de las normas, mientras al mismo tiempo dota de precisión su contenido y alcance, haciendo su aplicación práctica más efectiva. Lo importante es, desde un punto de vista teórico, tener claridad en cuanto a que el tratado no constituye o crea la norma de ius cogens, sino solo la asegura, garantiza y promueve”*

**CUARTO:** Que dentro de las mencionadas normas imperativas de general aplicación se encuentran aquellas que buscan sancionar y reparar los **crímenes más graves que atentan contra la integridad del ser humano**, los que conforme se expresa en el numeral 1 del artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (promulgado mediante Decreto N° 104 de 1 de agosto de 2009) son: a) el genocidio; b) los crímenes de lesa humanidad; c) los crímenes de guerra; y d) el crimen de agresión.

**QUINTO:** Que el artículo 7.1 de la mencionada norma internacional expresa que se entiende por **crimen de lesa humanidad** “*cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) desaparición forzada de personas; j) el crimen de apartheid; y k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física*”

En particular, la tortura consiste en “*causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas*”

En el mismo sentido el artículo 1.1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante resolución 39/46, de fecha 10 de



diciembre de 1984 y promulgada por nuestro país mediante el Decreto N° 808 de 26 de noviembre de 1988 expresa: “(...) *se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (...)*”

**SEXTO:** Que finalmente viene al caso recordar que es deber de los órganos del Estado someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, según el mandato dispuesto en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, dentro de las cuales se encuentran aquellas contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile y vigentes, al tenor de lo que expresa el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental y a los que se ha hecho referencia en los motivos que anteceden.

**II. En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el actor.**

**SEPTIMO:** Que la parte demandada fundó la excepción de que se trata en que a través de los distintos mecanismos de reparación que se han establecido a contar del año 1990, el demandante ha recibido una serie de beneficios, por lo que su pretensión de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral se encontraría satisfecha.

Acompañó oficio emitido por el Jefe del Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, que informa sobre los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que han obtenido los demandantes al 10 de mayo de 2022, en donde se consignan que figuran como víctimas de prisión política y tortura.

**OCTAVO:** Que al efecto cabe consignar que los **programas administrativos de reparaciones** contenidos en la Leyes N° 19.123 y N° 19.980 no constituyen obstáculos para que el Estado cumpla con la obligación internacional de reparación integral del daño, recogido en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos que en lo pertinente expresa: “(...) *se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada*”

De lo dicho se concluye que la solicitud de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral no es incompatible con las cantidades dinerarias que ha recibido y que eventualmente en el futuro recibirá el actor en razón de los mencionados programas administrativos, desde el momento que la determinación de la existencia del daño, la procedencia de su resarcimiento y cuantificación es materia que debe calificarse en esta sede.

Por lo razonado, se desestimaré la excepción en cuestión, según se dirá en lo resolutivo.



### **III. En lo relativo a la excepción de prescripción.**

**NOVENO:** Que el demandado ha opuesto la excepción que se revisará fundado en que la acción ejercida en autos se encontraría prescrita.

En principio, por haber transcurrido en exceso el término de cuatro años que en materia extracontractual dispone el legislador o, en subsidio, el lapso de cinco años que el derecho común dispone al efecto.

El plazo lo computa desde la detención ilegal y actos de tortura que sufrieron los actores, esto es, entre los años 1973 y 1974, 1984 y 1988 y en las fechas que señalan; y la fecha de notificación de la demanda, esto es, el 28 de septiembre de 2020 -aun considerando suspendido el plazo de prescripción durante el período de la dictadura militar- todo en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

**DECIMO:** Que resulta necesario consignar, como se dijo en los considerandos cuarto y quinto de la presente sentencia, que los hechos que motivan la acción indemnizatoria que se conoce en estos antecedentes **emanan de actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad**, de modo que la imprescriptibilidad ha de extenderse a la acción civil indemnizatoria.

**UNDECIMO:** Que, en efecto, si bien los instrumentos internacionales de derechos humanos -Pacto de San José de Costa Rica; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; entre otros- no se encontraban vigentes a la época en que ocurrieron los hechos, lo que podría llevar a que no resulten aplicables; en materia de derecho internacional de derechos humanos y, como se dijo en el considerando tercero de la presente resolución, las normas sobre ius cogens son fuentes materiales de derecho internacional, no pudiendo desatenderse al ser imperativas y de general aplicación para toda la comunidad internacional y, en lo particular, respecto de todo aquello que deriva de la pesquisa y sanción de los autores de delitos contra la humanidad y la reparación de sus víctimas, lo que resultaría imposible de cumplir al restringir a una porción de tiempo el acceso a la justicia para obtener el debido resarcimiento.

**DUODECIMO:** Que según se desprende de la *"Norma técnica para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el período 1973 – 1990 del Departamento de salud mental de la División de prevención y control de enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud"* los trastornos o daños que sufren las personas que fueron sujetos de actos de lesa humanidad surgen con posterioridad, trascendiendo incluso a sus familiares, lo que refuerza el hecho que no puede limitarse a un lapso el derecho de pedir al Estado ser reparados por los actos cometidos por agentes estatales en ejercicio de sus funciones.

Consecuente con lo dicho, el Relator sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación por Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Theo Van Boven, en 1993 señaló: *"está suficientemente probado que, para la mayoría de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el paso del tiempo no ha borrado las huellas, sino todo lo contrario, pues ha provocado un aumento del estrés*



*postraumático que ha requerido todo tipo de ayuda y asistencia material, médica, psicológica y social durante mucho tiempo"* (Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH-ONU), Informe final presentado por el Relator Especial sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993, párr. 135)

**DECIMO TERCERO:** Que establecido lo anterior, se rechazará la excepción de prescripción opuesta, según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y aquella alegada en subsidio, por lo consagrado en los artículos 2514 y 2515 del mismo cuerpo legal, según se dirá en lo resolutivo.

**IV. Respecto al fondo: indemnización de perjuicios en sede extracontractual.**

**DECIMO CUARTO:** Que corresponde determinar si en estos autos concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada, a partir de la determinación de la responsabilidad del Estado en la detención, privación de libertad, torturas y actos violentos practicados al actor al margen de todo proceso legal, por agentes del Estado.

**DECIMO QUINTO:** Que para acreditar sus asertos, los actores se hicieron hizo valer de la siguiente prueba DOCUMENTAL:

1. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don José Jaime Fuentes Pávez, cédula de identidad N° 5.672.253-K, de 7 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.
2. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Patricio Leandro Torres Rivera, cédula de identidad N° 11.434.656-K, de 18 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.
3. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Omar Pérez Santibáñez, cédula de identidad N° 4.285.148-5, 12 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.
4. Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 04 de junio de 2021, en el que se certifica que don Omar Pérez Santibáñez, cédula de identidad N°, de 4.285.148-5, se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y torturados, confeccionado por la Comisión Valech I, individualizado en el N° 18868.
5. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Patricio Ángel Escobar Solorza, cédula de identidad N°, de 8.351.581-3, 15 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.
6. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Luís César Fernández Zúñiga, cédula de identidad N° 5.034.521-1, 16 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.
7. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por doña Gloria María Palominos González, cédula de identidad N° 5.570.012-5, de 17 páginas, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.



8. Informe Pericial Psicológico de Evaluación de Daño Asociado a Violencia Política en Dictadura, emitido el día 15 de abril de 2022, por don Cristian Mauricio Vilches Guerra, Psicólogo clínico, quien examinó a don Patricio Leandro Torres Rivera, cédula de identidad N° 11.434.656-K.
9. Informe Psicológico de Evaluación de Daño emitido el 23 de julio de 2021, por el equipo del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, don Ignacio Fernández Rosas, Psicólogo, doña Pamela Jeria Ortiz, médico, y José Villanueva, médico Psiquiatra, quienes examinaron a don Patricio Ángel Escobar Solorza, cédula de identidad N°, de 8.351.581-3.
10. Informe Psicológico de Evaluación de Daño emitido el 23 de julio de 2021, por el equipo del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, don Ignacio Fernández Rosas, Psicólogo, y doña Pamela Jeria Ortiz, médico, quienes examinaron a don José Jaime Fuentes Pávez, cédula de identidad N°, 5.672.253-K.
11. Informe de Evaluación Psicológica y Médica de Daños y Consecuencias Producidas por la Violencia de Estado de fecha 4 de junio de 2021, en la que se examina a don Omar Pérez Santibañez, cédula de identidad N°4.285.148-5, por las profesiones del Programa de Reparación y Atención en Salud Integral (PRAIS) del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Javier Castro Alfaro, psicólogo, y doña Pamela Jeria Ortiz, médico internista.
12. Informe de Evaluación de Daño de fecha 17 de mayo de 2021 en la que se examina a Gloria María Palominos González, cédula de identidad N° 5.570.012-5, por las profesiones del Programa de Reparación y Atención en Salud Integral (PRAIS) del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Ignacio Fernández Rosas, psicólogo, y doña Pamela Jeria Ortiz, médico internista.
13. Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 25 de noviembre de 2021, en el que se certifica que doña Gloria María Palominos González, cédula de identidad N° 5.570.012-5, se encuentra calificada como víctima en el listado de Prisioneros políticos y Torturados elaborado por la Comisión Valech II, individualizada en el N° 6481.

**DECIMO SEXTO:** Que conforme se acredita con los instrumentos intitulados "*Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I*", singularizados con los N° 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del motivo anterior, resulta efectivo que los demandantes sufrieron detención ilegal y torturas por parte de agentes del Estado de Chile. A mayor abundamiento, los certificados emitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de los actores don Omar Pérez Santibañez y doña Gloria María Palominos González, de fechas 04 de junio de 2021 y 25 de noviembre de 2021, respectivamente, reiteran lo establecido anteriormente, en relación a que se encuentra calificados como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y torturados, con los números N°18868 y 6481, respectivamente.

**DECIMO SEPTIMO:** Que según se desprenden de los informes psicológicos acompañados, los actores presentan lo siguiente:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXEXXQSEBR

Don Patricio Leandro Torres Rivera, en informe elaborado por el psicólogo Cristian Mauricio Vilches Guerra, de fecha 15 de abril de 2022, se indica “En síntesis, los padecimientos actuales, tales como enfermedades, trastornos y malestar que este informe recoge se relacionarían consistentemente con la tortura y las diversas situaciones traumáticas a la que el evaluado fue expuesto.”

Don Patricio Ángel Escobar Solorza, en informe *“Psicológico de Evaluación de Daño”*, elaborado por el equipo del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, don Ignacio Fernández Rosas, Psicólogo, doña Pamela Jeria Ortiz, médico, y José Villanueva, médico Psiquiatra, de fecha 23 de julio de 2021, se indica *“Asimismo, a propósito del trastorno de estrés postraumático crónico, este es expresión de la fractura psíquica que conllevó la prisión y torturas vividas, habiendo sido expuesto a angustias abrumantes y sensaciones extremas de desamparo. En este sentido, el traumatismo psicológico ha implicado sintomatología de gran merma durante pasajes de su vida, como el desarrollo de terrores (como a salir a la calle y ser nuevamente agredido por agentes de Estado), sueños traumáticos, angustias constantes, sensaciones de persecución, insomnios incluso en la actualidad se hace presente el traumatismo bajo el mecanismo psicológico de defensa de represión (que empuja a no hablar de los dolores vividos, pero restringe involuntariamente las posibilidades de elaboración), así como mediante las sensaciones de terror ante uniformados. En este sentido, el traumatismo de estrés postraumático se expresa en una forma de memoria traumática, bajo la cual ante estímulos que se asocian a las violencias extremas se ve afectado por vívidas rememoraciones que lo llevan a una sensación de angustia y riesgo actual.*

*Así también, otro daño psicológico ligado a la violencia extrema de Estado sufrida por el evaluado es el desarrollo de estados depresivos. En este sentido, percibir los daños que porta, así como recordar los dolores sufridos lo sume en profundas tristezas que incluso implican que viva largos lapsos bajo ánimo depresivo, conllevando costos en las relaciones humanas.*

*Finalmente, ante los daños sufridos siente falta de reconocimiento y justicia de parte del Estado, sintiendo que le es fundamental el reconocimiento del Estado para articular caminos de reparación. Cuestión que subraya la importancia de que don Patricio vivencie hitos de reconocimiento y justicia en torno a los daños sufridos, base social que sería el soporte para la articulación de caminos de reparación psicológica.”*

Don José Jaime Fuentes Pávez, en informe *“Psicológico de Evaluación de Daño”*, elaborado por el equipo del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, don Ignacio Fernández Rosas, Psicólogo, y doña Pamela Jeria Ortiz, médico, emitido el 1 de octubre de 2021, se indica *“En base al material discursivo levantado, se constata que don José Fuentes Pavez presenta diversos daños psicológicos producto de la violencia extrema de Estado de la que fue objeto. Destacando el trastorno de estrés postraumático crónico como uno de los malestares con mayor impacto en su vida.*



*Al respecto, la violencia extrema vivida tras el allanamiento en la Textil Sumar, así como la magnitud y crueldad de las violencias sufridas en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional, devinieron en el desarrollo de trastorno de estrés postraumático crónico, el cual es producto del quiebre psíquico que implicó para el evaluado la violencia de la dictadura, llevándolo a sensaciones de desamparo, terror, incertidumbre y desesperanza. De esta manera, el traumatismo psicológico ha conllevado que durante su vida experimente diversa sintomatología asociada, entre esta, continuo miedo a ser nuevamente violentado, sensaciones de persecución, labilidad emocional, intenso odio y miedo a uniformados y manifestaciones de memoria traumática, es decir, sueños o recuerdos en vigilia en los que de forma intempestiva y con terror rememora con gran detalle las violencias vividas. Cabe señalar, que aunque con el paso del tiempo y con la terapia psicológica que emprendió la sintomatología traumática fue remitiendo, hay ordenes de esta aun presentes, mostrando la cronicidad del trastorno. Al respecto, vivencia actualmente manifestaciones de la memoria traumática que le implican ser llevado a profundas tristezas, por ejemplo califica septiembre de "horrible", siendo un mes que se enfrenta a muchos recuerdos y penas*

*A su vez, el impacto en su personalidad es uno de los danos traumáticos de mayor costo. En este sentido, don José siente que antes de la represión extrema era una persona simpática, pero, que tras esta se volvió hosco, amargo y de mal humor. Deterioro en la personalidad, que ha sido uno de los danos de mayor prolongación y merma en su vida (por ejemplo, afectando sus vínculos familiares).*

*Por otra parte, asociado a duelos patológicos (es decir sin remisión), vivencia sintomatología depresiva, la cual se ha generado por el dolor que le significa la muerte y/o desaparición forzada de amigos u otros prisioneros políticos, afectándolo además la imposibilidad de vivir ritos simbólicos, como funerales o un cuerpo al que velar.*

*Finalmente, don José siente que no ha habido justicia, por lo daños que porta, lo que implica que se obstaculicen los caminos de reparación. Dimensión que subraya la importancia de que el evaluado vivencie hitos de justicia y reparación en torno a los danos sufridos, articulando con ello una base social que sea el soporte de la reparación psicológica."*

*Don Omar Pérez Santibáñez, en "Informe de Evaluación Psicológica y Médica de Daños y Consecuencias Producidas por la Violencia de Estado", de fecha 4 de junio de 2021, emitido por los profesionales del Programa de Reparación y Atención en Salud Integral (PRAIS) del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Javier Castro Alfaro, psicólogo, y doña Pamela Jeria Ortiz, médico internista, se indica "Evidentemente, parte de la sintomatología que ha estado presente en el sr. Pérez en su vida cotidiana, está considerada dentro de lo que se conoce como Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y un Trastorno Depresivo Mayor, las cuales muestran cronicidad. Ahora bien, en lo que respecta al TEPT, debido a lo específico del daño que ocasiona de la violencia de Estado, esta adquiere un carácter distinto. En ese sentido, difícilmente puede considerarse la prisión y la tortura experimentada como similar otras situaciones que gatillan la sintomatología presente en este diagnóstico, como lo puede ser un accidente grave. [...]*





*Finalmente, es posible afirmar acorde a los antecedentes recabados, a lo descrito por el entrevistado y a las observaciones llevadas a cabo por el psicólogo y la médica, se afirma que el sr. Omar Pérez Santibáñez, Rut 4.285.148-5, sufre de consecuencias psicológicas y sociales asociadas al daño causado por la experiencia extrema del Terrorismo de Estado, las cuales producen en el sus efectos hasta la actualidad.”*

*Doña Gloria María Palominos González, en “Informe de Evaluación de Daño”, de fecha 17 de mayo de 2021, emitido por los profesionales del Programa de Reparación y Atención en Salud Integral (PRAIS) del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Ignacio Fernández Rosas, psicólogo, y doña Pamela Jeria Ortiz, médico internista, se indica “En base al material discursivo levantado, es factible referir que la entrevistada, la sra. Gloria María Palominos González, presenta diversos daños psicológicos producto de la violencia extrema que sufrió en dictadura.*

*Al respecto, el trastorno de estrés postraumático crónico se manifiesta como uno de los malestares psicológico de mayor impacto. En este sentido, las violencias extremas sufridas durante el ataque perpetrado a la fábrica de cecinas Loewer configuraron en la evaluada la caída del entramado social que le permitía sostenerse subjetiva y socialmente, lo que implicó que sintiese desamparo radical, terror e impacto ante la crueldad de la violencia. Asimismo, las torturas sexuales que sufrió por parte de agentes de Estado, particularmente las violaciones, configuraron vivencias que radicalizaron el impacto traumático, pues conllevaron la transgresión de su cuerpo y de su intimidad, violencia sexista que implicó que fuese cosificada y devaluada a un cuerpo a ser conquistado y vulnerado, dañando por esta vía su identidad. Además, tras las vejaciones sufrió el secuestro de su esposo y riesgo fetal, incrementando los estados traumáticos de desamparo y angustia.*

*Asimismo, y a propósito de la cronicidad del trastorno de estrés postraumático, la entrevistada hasta la actualidad presenta sintomatología traumática. Al respecto, vive memorias traumáticas, ya sea como recuerdos en vigilia, intempestivos y abrumantes de las violencias sufridas, o sueños traumáticos, es decir, manifestaciones oníricas en que con angustia se repiten vívidamente los daños sufridos. Además, experimenta temores a salir a la calle y ha vivido retraumatizaciones; por ejemplo, durante el estallido social sorpresivamente presencié un saqueo a un supermercado, lo que la retrotrajo al tiempo en que fue agredida por agentes de Estado, sintiendo que su vida corría peligro y que su hija podía ser asesinada.*

*En una línea similar, entre el año 1999 y 2000 vive una crisis en salud mental que derivó en que fuese diagnosticada con trastorno de personalidad y con bipolaridad, crisis que se asocia a los impactos del traumatismo, pues, en su trabajo sentía que violentaba a las personas cuando debía darles instrucciones o correcciones; interpretación que psíquicamente la expone a una identificación con los agresores, derivando ello en crisis de angustia y en una profunda depresión que incluso conllevó el desarrollo de anorexia (aún recibe tratamiento a propósito de síntomas depresivos).*



*A su vez, su proyecto de vida fue dañado, tanto en las proyecciones laborales y económicas, así como en la dimensión familiar. En torno a este aspecto, vivió las consecuencias psicológicas de la represión política sobre su esposo, de quien refiere que las violencias estatales conllevaron el deterioro de su personalidad, transformándose en un hombre violento, controlador y alcohólico, lo que tras años devino en el fin de la relación.*

*Finalmente, en la actualidad se ve enfrentada a una sociedad y a un Estado que percibe como insuficientes en el reconocimiento y justicia ante los daños que la dictadura perpetró.*

*Precariedad, que subraya la importancia del proceso judicial que desarrolla en la actualidad, pues este surge como una posibilidad de encontrar reconocimiento y justicia y, con ello, rearticular lazos que le permitan confiar en el entramado social, elemento basal para favorecer la reparación psicológica.”*

Se tratan de hechos que dejaron a los actores con trastornos físicos y psíquicos, así como la privación de poder desenvolverse en la actualidad y en lo cotidiano de un modo normal, aun sin la persecución política a la que fueron sometidos, lo que es presumible, le ocurre al demandante don Luis Cesar Fernández Zúñiga, quien también fue torturado.

En dicho contexto, el “Informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura militar”, elaborado por PRAIS y suscrito por doña Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga de PRAIS, de fecha 23 de septiembre de 2016, refiere que las reacciones más frecuentes en Violaciones de Derechos Humanos son: Re experimentación del trauma; evitación y embotamiento emocional; hiperexcitación; síntomas de depresión; disminución de la autoestima y sentido del futuro; disociación, despersonalización y comportamiento atípico; quejas somáticas; disfunciones Sexuales; psicosis; consumo excesivo de sustancias psicotrópicas; y Daños neuropsicológico, y añade que dentro de los diagnósticos más comunes para estas situaciones traumáticas se ha encontrado el Trastorno de la Ansiedad Generalizada; trastorno de pánico; trastorno de estrés agudo; trastorno somáticos; trastorno bipolar con episodios Maníacos o hipomaníacos; entre otros.

Lo anterior debe valorarse conjuntamente con los demás instrumentos aportados al proceso, que otorgan contenido a ese daño, en cuanto a las especiales características que tiene y a los excepcionales efectos que provoca en quien lo sufre.

Si bien el daño moral, esto es, el sufrimiento, dolor, molestia, desgracia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona, el miedo, la angustia, la ansiedad, la vergüenza, la pena, ocasionado por el hecho de que se trate; pudo presumirse a partir de la gravedad de los hechos ilícitos y de sus circunstancias concomitantes, todo lo cual se tuvo por acreditado, los antecedentes aportados por el actor permiten reafirmar su absoluta ocurrencia.

**DECIMO OCTAVO:** Que, como se dijo, los perjuicios o daños sufridos por el demandante son consecuencia del actuar de agentes del Estado de Chile, el que aparece



como responsable directo del dolor o aflicción que aquél padeció, así como de las secuelas físicas, psicológicas y psiquiátricas de ello.

**DECIMO NOVENO:** Que con lo dicho, se encuentra acreditada la procedencia de la indemnización de perjuicios que se demanda, a modo de reparación integral del daño, por lo que se accederá a aquélla por concepto de daño moral, según se dirá en lo resolutivo.

**VIGESIMO:** Que para la determinación del monto, se tendrá en especial consideración las circunstancias particulares vividas por los demandantes:

Don Luis Cesar Fernández Zúñiga fue detenido por primera vez en el año 1974, cuando allanaron su casa, siendo detenido en el Cuartel de Investigaciones ubicado en Rancagua. Luego relegado a Chaitén. Estuvo 5 días detenido, donde lo golpearon e interrogaron. Su segunda detención ocurrió en 1984, cuando nuevamente allanaron su casa y el negocio, estando detenido en el cuartel de investigaciones cinco días. Luego lo liberaron para volver a detenerlo, siendo llevado a investigaciones y trasladado a Santiago, al Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna, allí estuvo 2 días siendo interrogado y golpeado, para llevarlo a La Serena, donde lo encerraron en un calabozo en la cárcel. De ahí lo llevaron a Alto del Carmen en donde lo dejaron con carabineros. Lo obligaron a quedarse en dicho pueblo por tres meses, con firma tres veces al día.

Don Patricio Leandro Torres Rivera fue detenido a los 19 años, en enero de 1988 y llevado a un Cuartel de Investigaciones en la comuna de El Tabo. Allí lo golpearon y lo pasaron a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago. Después lo trasladaron al cuartel de Barrancas ubicado en San Antonio, donde lo interrogaron y torturaron, quebrándole los dientes. Al otro día lo entregaron a Gendarmería de Barrancas, quienes no lo quisieron recibir, a consecuencia de estar todo herido y ensangrentado. Entonces lo devolvieron y le dijeron que se cambiara de ropa para que lo aceptaran, al negarse a ello, lo volvieron a golpear hasta que lo hizo. Lo dejaron a cargo de Gendarmería, quienes lo pasaron al patio de los presos comunes en la cárcel de Barrancas de San Antonio. Allí lo ayudaron los abogados de la Vicaría. El 1 de febrero de 1988 lo trasladaron a la Cárcel Pública de Santiago, pasando la primera noche en la Penitenciaría, incomunicado en una celda de aislamiento que la llamaban “el metro”. Al otro día lo pasaron a la Segunda Fiscalía Militar y el juez le dijo que figuraba en una causa y que quedaba preso. Por eso, quedó detenido hasta noviembre de 1989, supuestamente salió en libertad por el indulto presidencial.

Doña Gloria María Palominos González fue detenida el 11 de septiembre de 1973, estando embarazada y trabajaba en una empresa de cecinas ubicadas en la comuna de San Miguel, tenía 18 años y 8 meses de embarazo. La llevaron a la Fuerza Aérea de San Bernardo, junto a otros trabajadores detenidos. Allí, la hicieron tirarse al suelo con las manos en la cabeza, la amenazaron y luego la subieron a camiones militares de la misma institución. También iba en calidad de detenido su esposo, José Francisco Cisterna Valenzuela (fallecido), él también era obrero. Permaneció detenida un día completo, pero su esposo quedó detenido durante una semana. Durante el tiempo que estuve allí la tuvieron vendada y la sometieron a simulacros de fusilamiento e



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXECXXQSEBR

interrogatorios. Durante la semana que él quedó detenido no supo nada. Estuvo con síntomas de pérdida y tuvo que hacer reposo por el estrés que le causaron.

Don José Jaime Fuentes Pávez fue detenida el 12 de septiembre de 1973 a eso de las 7:30 am, en la empresa manufacturas Sumar, donde trabajaba. Le hicieron tirarse al suelo, con los brazos extendidos, boca abajo, caminaban por arriba de él, interrogándolo. Luego lo trasladaron al Regimiento Buin, ahí estuvo un día y una noche, dejándolo en la pesebrera donde estaban los animales. Después lo trasladaron al Estadio Chile, ahí estuvo dos días y dos noches, ahí presenció que mataron personas, ya sea escuchándolo o cuando era evidente que habían detenidos que los apartaban y no se sabía más de su paradero. Después en buses lo trasladaron al Estadio Nacional, permaneciendo ahí hasta el 12 de octubre de 1973, ahí lo ubicaron en el camarín Tres, donde lo sometieron a simulacros de fusilamiento, siendo interrogado, permaneciendo detenido un mes en total.

Don Omar Pérez Santibáñez fue detenido el 29 de octubre de 1973 en su casa, siendo subido a un vehículo investigaciones y llevado al Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna, ahí lo golpearon e interrogaron, estando más o menos siete días en un subterráneo. Después lo trasladaron al Estadio Nacional, ahí permaneció un mes detenido aproximadamente. Con posterioridad lo trasladaron al Estadio Chile, allí estuvo dos meses y medio aproximadamente y luego lo mandaron detenido a la Penitenciaría de Santiago, donde estuvo un par de meses, en total estuvo 9 meses detenido.

Don Patricio Ángel Escobar Solorza fue detenido a los 14 años de edad, a las 5 de la tarde del 11 septiembre de 1973, cuando apareció un camión de militares y lo subieron al vehículo y lo llevaron a la 21 Comisaría de José María Caro, que actualmente corresponde a la comuna de Pedro Aguirre Cerca. Ahí estuvo casi un día completo, luego lo trasladaron al Cuartel del Regimiento Tacna ubicado Santiago centro, ahí estuvo un par de horas y luego sigue el traslado hasta el Estadio Chile, permaneciendo cinco días aproximadamente. Desde allí lo trasladan al Estadio Nacional, estuvo detenido unos 20 días aproximadamente. Su familia lo buscó durante días y les negaban o no les daban ninguna información. Su detención duró hasta que un coronel que estaba haciendo una inspección de los detenidos, se dio cuenta que era menor de edad.

**VIGESIMO PRIMERO:** Que en lo atinente a la alegación de la demandada referida a la improcedencia de reajustes e intereses, debe expresarse que los primeros permiten mantener el valor monetario en el tiempo, de modo que resultan procedentes, desde que se declara la existencia de la obligación, esto es, a partir que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada, habida consideración a que desde esa oportunidad la situación jurídica queda indefectiblemente establecida.

Por lo dicho, la suma fijada en lo resolutivo se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes que preceda al pago.

Que respecto del pago de intereses corrientes, éstos se devengarán desde que el deudor se constituya en mora.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXECXXQSEBR

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 144, 160, 154, 170, 254, 341, 342, 346, 356 y siguientes 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 1437, 1698, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515; 5, 6, 7 y 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República de Chile; Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Convención Americana de Derechos Humanos; Convenios de Ginebra; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, **se declara:**

- I. Que se rechaza la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el actor;
- II. Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y aquella en subsidio, por lo consagrado en los artículos 2514 y 2515 del mismo cuerpo legal;
- III. Que se acoge, con costas, la demanda deducida y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar la suma de \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos), para cada uno de los actores, por concepto de daño moral, más reajustes e intereses según la determinación que se hizo en el considerando vigésimo primero de la presente sentencia.

**Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.**

**PRONUNCIADA POR DON RICARDO HUMBERTO CORTES CORTES, JUEZ TITULAR.**

**AUTORIZA DOÑA LORETO GREZ BECKER, SECRETARIA SUBROGANTE.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dos de Agosto de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXECXXQSEBR